

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 15º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-5257-2023
CARATULADO : VIDAL/FISCO DE CHILE - MINISTERIO DE
MINERIA

Santiago, veintitrés de Febrero de dos mil veinticuatro

VISTOS:

Con fecha 25 de marzo de 2023 comparece el abogado Alberto Espinoza Pino y la abogada doña Marta De La Fuente Olguín, en representación de Cristian Gonzalo Vidal Iglesias, técnico, domiciliado en Pasaje La Africana 5155, Comuna de Estación Central, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representada por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, don José Antonio Peribonio Poduje, domiciliado en Agustinas N°1.687, comuna y ciudad de Santiago.

Señala que, respecto del demandante don Cristian Gonzalo Vidal Iglesias, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura, Valech 1, N° 26256, contaba con 23 años a la fecha de ocurrencia de los hechos y trabajaba en una compañía exportadora de frutas.

Relata que el día 3 de junio del año 1988 y mientras circulaba por una calle del sector Alto de Forestal, fue detenido por dos individuos, quienes lo esposaron y vendaron los ojos. Luego, indica que procedieron a trasladarlo en auto al sector de Chorrillos en Viña del Mar, en donde lo interrogaron, golpeándolo repetidamente y aplicando torturas sicológicas, consistentes en amenazas de matar a su madre y todos los habitantes de su casa en caso que les entregara información falsa. Asimismo, le infringieron tortura física, consistente en golpes en diversas partes del cuerpo.

Sostiene que, a continuación, fue trasladado al cuartel de investigaciones de Valparaíso, en donde lo mantuvieron por días sin acceso al baño, cama, agua, y comida, estando en todo momento con los ojos vendados e incomunicado. En el lugar mencionado, afirma que fue sometido a múltiples interrogatorios, donde fue nuevamente objeto de torturas consistentes en aplicación reiterada de corriente eléctrica y golpes en diversas partes de su cuerpo. Con posterioridad, relata que lo hicieron participe de una sesión fotográfica con la prensa y que la fotografía que le tomaron fue la portada del diario El Mercurio el día domingo 5 de junio de 1988.



Foja: 1

Agrega que le hicieron firmar una declaración de la que solo pudo leer el primer párrafo.

Alega que, con posterioridad fue trasladado a un centro de torturas en la fiscalía naval de Valparaíso, en donde lo obligaron a declarar frente a un actuario de apellido "Sanhueza". Después de cinco días en el centro de torturas, es trasladado nuevamente a la cárcel pública de Valparaíso, en donde se encuentra incomunicado. En dicho lugar se mantuvo por el periodo de dos años y diez meses y fue posteriormente condenado por ley de control de armas y explosivos a la pena de dos años. Afirma que recuperó su libertad a los 26 años, el día 5 de abril de 1991.

Sostiene que su vida no ha sido la misma desde aquel junio del año 1988, teniendo que pasar por dolores y miedos internos, que se mantienen hasta el día de hoy así como las torturas y humillaciones a las que se vio sometido, las que no ha podido olvidar. Finalmente, se señala que don Cristian nunca ha podido superar el trauma que le produjeron los hechos descritos. Alega que las secuelas de la tortura a la que fue sometido, tanto física como psicológica no se ha borrado ni de su cuerpo ni de su mente.

En cuanto a los fundamentos de derechos, refiere que los hechos relatados se encuadran dentro de lo denominado crimen de lesa humanidad, y en virtud de aquello funda la responsabilidad del Estado a la luz de lo dispuesto en nuestra Constitución Política, en especial los artículos invoca entre otros, los artículos 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 19º y 38º, así como también tratados internacionales sobre derechos humanos, citando jurisprudencia y doctrina ilustrativa al efecto que justificaría la responsabilidad del Estado por los hechos relatados, que tendrían la calidad de ilícitos, debiendo indemnizarse el daño provocado.

Por los hechos expuestos interpone la presente demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, acogerla a tramitación y en definitiva hacer lugar a ella en todas sus partes, condenando al demandado a pagar al demandante la suma total de \$300.000.000.- (trescientos millones de pesos), a título de indemnización por el daño moral que se le ha causado como consecuencia por las torturas de que fue objeto, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que se estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.

Con fecha 21 de abril de 2023 se notificó al demandando de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.



Foja: 1

Con fecha 12 de mayo de 2023 comparece el Fisco de Chile, debidamente representado, quien al contestar la demanda solicita su total rechazo, con costas, conforme los siguientes fundamentos.

En primer lugar, opone excepción de reparación integral, fundada en la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.

Como marco general sobre las reparaciones ya otorgadas, argumenta que para comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos deben posicionarse correctamente en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior del ámbito de la llamada “Justicia Transicional”.

El denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que brinden la necesaria tranquilidad a un país deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades en específicos momentos históricos definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Por otra parte, no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Este concurso de intereses o medidas de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación. Estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

Afirma que el gobierno de don Patricio Aylwin se abocó preferentemente, a propósito de justicia transicional, a lo siguiente: a) establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en la dictadura; b) provisión de reparaciones para los afectados; y, c) favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que impidan que aquellas violaciones puedan volver a producirse.

En relación con el segundo objetivo, la Comisión Verdad y Reconciliación o Comisión Rettig en su informe final propuso una serie de propuestas de reparación entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe



Foja: 1

sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que derivaría en la Ley N° 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Indica que el Mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba en términos generales la reparación del daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas.

De esta forma, en la discusión de la Ley N° 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación “moral y patrimonial” buscada por el proyecto. La noción de reparación “por el dolor” de las vidas perdidas se encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente a la “responsabilidad extracontractual” del Estado. Así las cosas, afirma que esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18.

Argumenta que la reparación de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos se ha realizado principalmente por medio de tres tipos de compensaciones, a saber: a) transferencias directas de dinero; b) asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, c) reparaciones simbólicas.

En lo que concierne a la primera modalidad, diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Destaca que en la discusión legislativa de esta norma se enfrentaron principalmente dos posiciones, por un lado algunos sostenían que la reparación debía hacerse a través de una suma única de dinero, mientras que otros abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Al final del día, ambas modalidades tendrían fines resarcitorios.

Indica que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de pensiones la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley N° 19.123 (Comisión Rettig) y de \$ 648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley N° 19.992 (Comisión Valech); en concepto de bonos ha supuesto la suma de \$ 41.910.643.367.- asignada por la Ley N° 19.980 (Comisión Rettig) y de \$ 23.388.490.737.- por la ya referida Ley N° 19.992; y en cuanto a desahucio (bono compensatorio), la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley N°



Foja: 1

19.123; y finalmente, la suma de \$23.388.490.737- por concepto de bono extraordinario asignado por la Ley N° 20.874.

Consecuencia de lo anterior, a diciembre de 2019 el Fisco ha desembolsado la suma total de \$ 992.084.910.400.

Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario ello no obsta a que se pueda valorizar para poder saber cuál fue su impacto compensatorio; basta con sumar las cantidades pagadas a la fecha, más las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Señala que el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto, además que constituyen una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, obteniéndose con ello compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

A renglón seguido agrega que se han otorgado reparaciones específicas. En este sentido el demandante recibido los beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N° 19.992, la cual estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de Derechos Humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas reconocidas como víctimas.

Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Adicionalmente, imputa que el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874.-, por \$1.000.000.

A propósito de la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, cabe decir que se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley N° 19.234 como de la Ley N° 19.992 el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS). Para acceder al beneficio, sólo basta concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente e inscribirse en la oficina del PRAIS.

Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los veintinueve Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de



Foja: 1

intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Se establecen también beneficios educacionales consistentes en la gratuidad de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

Se concedieron, asimismo, beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios.

Por último, las reparaciones simbólicas se efectúan a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a las violaciones. Señala que este tipo de acciones pretende reparar tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

La doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables. A modo de ejemplo destaca la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; el establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido, el 30 de agosto de cada año; la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; el establecimiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos; y, la construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las infracciones a los DD.HH., tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras.

Afirma que de lo expresado hasta ahora existe una identidad de causa entre lo que se pide en autos y las reparaciones realizadas, ya que tanto la indemnización que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, ser exigidos nuevamente.

Apoya su defensa en este punto citando jurisprudencia, particularmente el fallo “Domic Bezic, Maja y otros con Fisco”, donde la Excma. Corte Suprema en sentencia de casación reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de la Ley N° 19.123.

Sostiene que diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”, lo que constituye un factor congruente



Foja: 1

con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la procedencia de la indemnización. De esta manera órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas, citando lo resuelto por la Corte en el caso Almonacid en dicho sentido.

Agrega que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades. En un documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (Rule of Law for post-conflicts states) se ha referido expresamente a los programas de reparación, señalando la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los mismos y paralelamente ejercer una acción civil, por la vía judicial, pues genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño, poniendo en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos o prestarse para desigualdades entre las personas con mayores recursos y los que no los tienen.

En la misma línea la autora Elizabeth Lira expresa que es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional, ya que dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones y ello genera el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.

La segunda excepción de fondo que interpone el demandado es la prescripción extintiva de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil en relación con el 2497 del mismo, solicitando el rechazo de la demanda en todas sus partes por encontrarse prescrita la acción.

Señala que, según el relato de la demanda, las detenciones ilegales, privaciones de libertad y torturas respecto del reclamante se produjeron desde el 03 de junio de 1988 y hasta el 05 de abril de 1991.



Foja: 1

Sostiene que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la propia víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia hasta la restauración de la democracia a la fecha de la notificación de la demanda, esto es el 21 de abril de 2023, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva de cuatro años que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.

En subsidio, para el caso de que el Tribunal considere que la norma anterior no resulta aplicable al caso, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 del Código Civil en relación al artículo 2514, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la de notificación de la demanda transcurrió con creces dicho plazo.

Como generalidad sobre la prescripción, refiere que es una institución universal y de orden público, que las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil que la consagran y en especial las de su Párrafo I se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre ellas el artículo 2497 del citado cuerpo normativo, que manda a aplicar las normas de prescripción a favor y en contra del Estado y consagra el principio que al igual que tratándose de relaciones entre particulares la prescripción afecta o favorece sin excepciones a las personas jurídicas de derecho público a pesar de que éstas se rijan por leyes y reglamentos especiales, como señala el artículo 547 inciso 2° del Código Civil.

Agrega que la responsabilidad que se le atribuye al Estado y la que se reclama contra particulares tiene el mismo fin, cual es resarcir un perjuicio extrapatrimonial a través de un incremento patrimonial del afectado.

Aduce que el Pleno de la Excma. Corte Suprema dictó con fecha de 21 de enero de 2013 una sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 y zanjó esta controversia señalando:

1. Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva (considerando octavo).

2. Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros



Foja: 1

de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal (considerandos cuarto, quinto, sexto y séptimo).

3. Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto (considerando décimo).

4. Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención del demandante en la especie), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los Tribunales de Justicia.

Asegura que la indemnización de perjuicios no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. Por ello, la acción destinada a exigirla, como toda acción patrimonial, está expuesta a extinguirse por prescripción.

Precisa que, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia (citando al pie variedad de la misma), en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar en materia de prescripción las normas del Código Civil, y tal proceder no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue.

Por último, en cuanto a las alegaciones del actor en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, señala que se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, adelantando que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno de esta materia:

- Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, declara la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, pero en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la



Foja: 1

responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

- Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

- Resolución N° 3.074 de 1973, de la Asamblea General de la Naciones Unidas, denominada "Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad", se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

- Convención Americana de Derechos Humanos, a cuyo respecto Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, esto es, el 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Además, el artículo 63 de la Convención faculta exclusivamente a dicha Corte para imponer condenas de reparación de daños, pero ello no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile.

Señala que dicho planteamiento ha sido recogido por la Corte Suprema en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo el recurso de casación interpuesto en los autos ingreso 1133-06 caratulados Neira con Fisco de Chile, de 24 de julio de 2007.

En síntesis, sostiene que no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, corresponde aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Por todo lo expuesto solicita el rechazo de la demanda por encontrarse prescrita la acción civil deducida.



Foja: 1

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, opone las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y del excesivo monto pretendido.

Señala que, tratándose del daño puramente moral, por afectar a bienes extrapatrimoniales o inmateriales y, por lo mismo, no apreciables en dinero, la indemnización no hace desaparecer el daño, ni tampoco lo compensa en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece, a pesar de la indemnización.

Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando en términos económicos el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Indica que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para la indemnización, pues el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia esas capacidades.

En tal sentido la cifra pretendida en la demanda como compensación de daño moral resulta absolutamente excesiva, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile y los montos promedios fijados por los Tribunales de Justicia en esta materia.

En subsidio de las alegaciones precedentes de reparación satisfactiva y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

En efecto, alega que en todo caso en la fijación del daño moral deben considerarse todos los pagos recibidos a través de los años por el demandante de parte del Estado conforme a las leyes de reparación ((19.123, 19.234 y 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirá percibiendo a título de pensión y también los beneficios extrapatrimoniales que dichos cuerpos legales contemplan.

De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo que no es jurídicamente procedente.

En cuanto a los reajustes indica que sólo pueden devengarse en el caso que la sentencia acoja la demanda y establezca esa obligación y desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada, pues antes no existe ninguna



Foja: 1

obligación para su representado de indemnizar ni suma, en consecuencia, que reajustar.

En lo que toca a los intereses, señala que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia. Por consiguiente, de acogerse la demanda, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Por lo expuesto solicita acoger las excepciones y defensas opuestas y rechazar la demanda en todas sus partes, con costas o en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido por el actor.

Mediante presentación de fecha 18 de mayo de 2023, el demandante evacuó el trámite de la réplica.

Luego, con fecha 29 de mayo de 2023, el demandado evacuó la dúplica ratificando las alegaciones hechas valer mediante su escrito de contestación.

Con fecha 5 de junio de 2023, se recibió a prueba la causa, rindiéndose la que consta en autos.

Finalmente, y encontrándose la causa en estado, se citó a las partes para oír sentencia con fecha 1 de diciembre de 2023.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don Cristian Gonzalo Vidal Iglesias, debidamente representado e interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, todos debidamente individualizados, a fin que de que se le indemnice por los perjuicios causados por agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones, condenándosele a pagar la suma de \$300.000.000 por concepto de daño moral, más reajustes, intereses y costas, por los fundamentos de hecho y argumentos de derecho ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que, al contestar la demanda, el Fisco de Chile solicita su total rechazo por las consideraciones ya reseñadas en lo expositivo.

TERCERO: Que, el demandante sustenta su pretensión indemnizatoria en el hecho de ser víctima de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra, producto de la detención y torturas a las que fue sometido, todos actos efectuados por agentes del Estado de Chile en el ejercicio de sus funciones.

Especifica claramente las fechas de sus detenciones, privaciones de libertad y las torturas recibidas, como también las secuelas físicas y psicológicas que los tormentos ya relatados le ha dejado y la manera cómo ha incidido en su vida.



Foja: 1

CUARTO: Que, atendido lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, toca al actor acreditar los supuestos de hecho en que afina su acción.

QUINTO: Que, a objeto de acreditar los presupuestos fácticos en que asientan su demanda, el reclamante acompaña la siguiente prueba instrumental al proceso, libre de objeción de la contraria:

1. Copia de nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 1, en la que don Cristian Gonzalo Vidal Iglesias figura bajo el número 26256.
2. Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos de fecha 9 de marzo de 2023.
3. Informe completo emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de fecha 20 de mayo de 2004.
4. Fotografía de la portada del diario El Mercurio de Valparaíso de fecha 05 de junio de 1988.
5. Norma General Técnica N° 88, para la Atención de Personas Beneficiarias del Programa de Atención en Salud a las Personas Afectadas por la Represión Política ejercida por el Estado en el Período 1973-1990, emitida por Departamento de salud mental de la División de prevención y control de enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud.
6. Capítulo v, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech, titulado “Métodos de tortura: Definiciones y testimonios”.
7. Capítulo VIII, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech, titulado “Consecuencias de la prisión política y la tortura”.
8. Copia, presentación realizada por el Psicólogo Freddy Silva G., en su calidad de Coordinador Especializado del Equipo PRAIS.
9. Conferencia Internacional denominada Consecuencias de la Tortura en la Salud de la Población Chilena, emitido por el Ministerio de Salud de Chile.
10. Artículo titulado “El Informe Valech y la tortura masiva y sistemática como crimen contra la humanidad cometido en Chile durante el régimen militar. Su enjuiciamiento desde la perspectiva del derecho penal internacional”, elaborado por el profesor Jean Pierre Matus.
11. Ponencia titulada “Tortura y trauma psicosocial”, elaborada por el siquiatra Carlos Madariaga, en el marco de la Conferencia Internacional “Consecuencias de la Tortura en la Salud de la Población Chilena: Desafíos del Presente”.
12. Copia de Informe del Relator, Theo Van Boven, sobre el Derecho a la Restitución, Indemnización y Rehabilitación por Graves Violaciones a los Derechos Humanos.



Foja: 1

13. Informe Biopsicosocial de don Cristian Gonzalo Vidal Iglesias, elaborado por el Programa De Reparación y Atención Integral en Salud y DDHH (PRAIS).

SEXTO: Que, por su parte, la demandada solo acompañó certificado emitido por el Instituto de Previsión Social (IPS) que informa sobre los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido el demandante.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo anterior, apreciando la prueba producida por las partes en forma legal, la confesión que significa la alegación del demandado de haber reparado a los demandantes mediante las pensiones que establecen las Leyes N° 19.123, 19.992 y 19.234, y del aporte único de la Ley N° 20.874, montos que obedecen a reparaciones parciales a personas exoneradas por motivos políticos y a los titulares individualizados en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados" de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, en virtud del carácter público de dichas nóminas, el Tribunal por sí mismo constata que el demandante forma parte de las nóminas antedichas, por lo que ha de tenerse por acreditado que fue detenido y torturado por agentes del Estado de Chile con posterioridad al mes de septiembre de 1973, lo que se tradujo en tratos crueles, inhumanos y degradantes, como fue expuesto en su libelo.

OCTAVO: Que, la primera defensa planteada por el Fisco de Chile dice relación con la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante al amparo de los beneficios previstos en los textos normativos precitados, ya sea en transferencias directas de dinero, asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante un conjunto de reparaciones simbólicas que menciona.

NOVENO: Que, el artículo 1° de la Ley N° 19.992 establece una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Decreto Supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.

A su vez el artículo 2° prescribe que la pensión anual establecida en el artículo 1° ascenderá a \$1.353.798.- para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad, a \$1.480.284 para aquellos beneficiarios de 70 o más años de edad



Foja: 1

pero menores de 75 años y a \$1.549.422 para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; que se pagará en 12 cuotas mensuales de igual monto y se reajustará en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen la referida disposición.

La pensión establecida en el inciso precedente será incompatible con aquellas otorgadas en las Leyes N° 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento.

Por su parte el artículo 4° de la indicada ley señala que la pensión otorgada por esta ley será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario, incluidas las pensiones asistenciales del Decreto Ley N° 869, de 1975. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes.

A su vez, la Ley N° 19.234 estableció beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos.

DÉCIMO: Que, el Estado de Chile ha hecho un formal reconocimiento de una serie de hechos constitutivos de violación de los derechos humanos acaecidos a contar del 11 de septiembre de 1973 a través del mensaje que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y a través de la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile”, conocida como Comisión Valech.

De las normas legales recientemente relacionadas es posible concluir que la pensión anual de reparación constituye más bien un beneficio de carácter social y no una indemnización de daño moral para reparar a aquellos que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

En efecto, no aparece en la determinación de su monto que se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar injustas y vejatorias privaciones de libertad, acompañadas de apremios físicos ilegítimos, lo cual constituye requisito fundamental a la hora de fijar una indemnización que no puede ser entendida sino con la finalidad de reparar o compensar un daño cierto y determinado, ello sin perjuicio de que los reclamantes hubiesen optado por mantener la pensión que tenían por resultar incompatible con la establecida por la Ley N° 19.992, como puede inferirse de la lectura del detalle de beneficios que reciben.



Foja: 1

UNDÉCIMO: Que, conforme a lo razonado, no procede imputar a la indemnización debidas al demandante las cantidades que en calidad de beneficiario de las reparaciones y pensiones que haya recibido ya en sus respectiva calidad de presos políticos o como exonerados políticos, por lo que no cabe sino desestimar la excepción de reparación satisfactiva.

DUODÉCIMO: Que, enseguida corresponde hacerse cargo de la excepción de prescripción alegada por el Fisco demandado en su escrito de contestación.

En primer término, cabe señalar que tratándose de violaciones a los derechos humanos – cual es la calificación que debe darse a los hechos fijados en el motivo séptimo del fallo –el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil se encuentra en normas y principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos y ello ha de ser necesariamente así por cuanto este fenómeno de graves transgresiones a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana es posterior al proceso de codificación, que por lo mismo no lo considera pues, por una parte, responde a criterios claramente ligados al interés privado y, por otra, por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX.

DÉCIMO TERCERO: Que, conforme a lo anteriormente expuesto no cabe calificar la acción indemnizatoria deducida en autos por el demandante como de índole o naturaleza meramente patrimonial, porque los hechos en que se la sustenta son ajenos a una relación contractual –vinculada a un negocio común –o extracontractual, sino configurativas de un delito de lesa humanidad del cual emana, además de la acción penal, una civil de carácter humanitario. Y es de esta clase en razón de que la pretensión del actor se fundamenta en las torturas de que fue víctima, en completa indefensión, por agentes del Estado que disponían del monopolio del poder coercitivo estatal.

DÉCIMO CUARTO: Que, en efecto, no puede negarse el carácter de delitos de lesa humanidad a aquellos que sirven de fuente u origen a la acción impetrada en la demanda.

Asimismo, se ha constatado que el demandante aparece incorporados en la nómina de prisioneros políticos y torturados anexada al informe elaborado por la denominada Comisión Valech que fuere reseñada al considerando quinto y, dado su carácter público, consultada en el sitio web del Instituto Nacional de Derechos Humanos, reconocido como víctimas de prisión política y tortura; en tal carácter, en lo tocante a la indemnización de perjuicios, hace aplicable también en lo que dice relación al acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares a fin de conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente, los convenios o tratados internacionales, las reglas de Derecho Internacional que se consideran ius cogens



Foja: 1

y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que “el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales” y que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete su responsabilidad internacional (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, “Las Constituciones Latinoamericanas”, página 231).

DÉCIMO QUINTO: Que, la cuestión de los derechos fundamentales constituye un sistema construido a partir de criterios particulares, propios de la naturaleza del hecho, y por tal razón no es posible interpretar las normas que los regulan de manera aislada, pues toda conclusión alcanzada en tales circunstancias necesariamente será contraria a este sistema jurídico. Cuando las referidas normas dejan de aplicarse a un caso que estaban llamadas a regir se produce su contravención y se infringe también la regla del artículo 5º de la Constitución Política de la República que, junto con reconocer el carácter vinculante de los instrumentos de Derecho Internacional, establece que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” y el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos fundamentales, entre los que también ha de entenderse el de obtener una indemnización como la que ha sido reclamada en estos autos.

DÉCIMO SEXTO: Que, el derecho de la víctima a recibir la reparación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho interno chileno, conforme lo dispuesto en el ya citado artículo 5º de la Constitución Política.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, analizando ahora los preceptos invocados por el Fisco de Chile en sustento de su pretensión de rechazo de la demanda indemnizatoria, cabe señalar que no resultan atinentes las reglas de Derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios al encontrarse éstas en abierta contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de recibir la reparación correspondiente a víctimas y familiares de éstas.

Asimismo, en tanto el Fisco acepta explícitamente la posibilidad de que el plazo de la prescripción extintiva que alega se compute desde una época distinta de aquella que señala el artículo 2332 del Código Civil, no puede sino concluirse que hay también una clara aceptación de que los preceptos de este cuerpo legal



Foja: 1

no son necesariamente los llamados a regir un caso como el planteado y que pueden, por lo mismo, dejar de tener aplicación sin que esta omisión importe contravenirlos.

No debe olvidarse que la obligación indemnizatoria está originada para el Estado, tratándose de la violación de los Derechos Humanos, no sólo por la Constitución sino también por los Principios Generales del Derecho Humanitario y de los Tratados Internacionales sobre la materia, como expresión concreta de los mismos, de tal suerte que las normas del derecho común interno se aplicarán sólo si no están en contradicción con esta preceptiva.

DÉCIMO OCTAVO: Que, entonces, cuando el Código Civil en su artículo 2497 señala que las reglas de prescripción “se aplican igualmente a favor y en contra del Estado”, debe considerarse que ello no resulta pertinente a esta materia, atendida su particular naturaleza según se ha puesto de manifiesto y es por ello que debe darse aplicación a las normas contenidas en los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En efecto, de acuerdo con este último precepto la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícito queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar disposiciones de Derecho interno. A este respecto debe también tenerse presente el carácter consuetudinario de estas normas y que atendida su naturaleza no son creadas sino simplemente reconocidas por los Estados, de lo que deriva su ineludible aplicación, de manera tal que produciéndose un hecho ilícito imputable a un Estado la responsabilidad de éste surge de inmediato por la violación de la norma de Derecho Internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias indeseadas.

La Corte Interamericana ha aclarado, además, que el artículo 63.1 de la Convención no remite al Derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado, de modo que la obligación no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo (Caso Velásquez Rodríguez).

DÉCIMO NOVENO: Que, en el mismo sentido el artículo 131 de la Convención de Ginebra pretende hacer efectiva la responsabilidad que resulta de esta clase de hechos y no se limita a la de carácter penal. Lo mismo ocurre con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente desde el 27 de enero de 1980, que previene –según ya se afirmó –que los Estados no pueden invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales -en la especie, la de establecer responsabilidades –incumplimiento del que ciertamente derivaría responsabilidad por un ilícito de índole internacional.



Foja: 1

Lo anterior conduce a sostener que el derecho a la reparación es un derecho fundamental, esto es, uno de aquellos que los Estados declaran para asegurar y hacer posible la convivencia democrática, el que por su naturaleza es imprescriptible.

VIGÉSIMO: Que, además, debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva del inciso 3° del artículo 6° de la Constitución Política de la República y del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y que de aceptarse la tesis del Fisco demandado quedarían inaplicadas. Específicamente en lo que se refiere a la norma de mayor jerarquía, puede señalarse que el referido artículo 6° se encuentra comprendido en el capítulo denominado “Bases de la Institucionalidad”, por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción y contiene el imperativo categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, no es posible sostener la inexistencia de responsabilidad del Estado en esta clase de infracciones por la prescripción de la acción civil reparatoria, porque el valor justicia que orienta el Derecho y la convivencia social rechaza tal posibilidad, al extremo que el Derecho Internacional ha recogido el criterio que predica que todo daño que sea su consecuencia ha de ser reparado. Además, tal alegación desconoce la naturaleza del hecho que motiva la indemnización solicitada cuando reclama el sistema de responsabilidad extracontractual, porque si bien es cierto que la cuestión está desvinculada de lo meramente convencional o contractual, ello no implica que haya de hacerse aplicación de este régimen, que comprende la cuestión de la culpa y el dolo referidos a un agente determinado. En un caso como el de la especie no resulta necesario ocuparse de acreditar estos supuestos de responsabilidad en los causantes directos del daño, porque inequívocamente los hechos no han podido acaecer sino porque el mismo Estado actuó de manera dolosa cuando desarrolló en forma reiterada conductas lesivas a los derechos fundamentales, esto es, cuando integrantes de sus órganos de seguridad se involucraron en torturas, desapariciones forzadas y muertes, entre otros graves atentados.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en síntesis, tratándose la tortura de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso



Foja: 1

2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito. Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez en orden a separar ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia que se le reclama.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en relación con el daño, presupuesto necesario para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, ha de señalarse que a pesar de su naturaleza particular el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por tanto, aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona.

Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich, como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

Como puntualiza el profesor Diez Schwerter, “El daño moral consiste en la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona, pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (DIEZ Schwerter, José Luis. “El daño extracontractual”. Editorial Jurídica de Chile, pág. 88.).

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en la especie la existencia del daño moral en el caso de marras puede presumirse de los hechos asentados en la causa atendida la gravedad del hecho ilícito y las circunstancias en que los hechos acontecieron y sus consecuencias, con motivo del dolor y angustia, tanto físicas como psicológicas, que experimentó el demandante con motivo de su detención y torturas, experiencia traumática que sin duda produjo diversos efectos psicológicos como necesario correlato de haber sido víctima de dichos actos y que justifican la indemnización por daño moral.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en la determinación del quantum de la indemnización, no se considerarán los pagos ya recibidos del Estado, conforme a



Foja: 1

las leyes de reparación, atendido lo razonado en los motivos noveno a undécimo que preceden; por ende, éste se evaluará prudencialmente, teniendo en consideración para ello la innecesaria, irracional y violenta ocurrencia de los sucesos relatados, sus perniciosas consecuencias y especialmente el largo tiempo en que el demandante fue privado de libertad y objeto de vejámenes de diferente clase. Por estas razones se fija la indemnización solicitada en la suma de \$90.000.000 (noventa millones de pesos) para el demandante.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer el demandado, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses desde que el fallo quede ejecutoriado.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y no habiendo resultado el demandado totalmente vencido se le eximirá, en definitiva, del pago de las costas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, 1700, 1706, 1712, 2492 y 2518 del Código Civil; 144, 160, 170, 254 Y 342 del Código de Procedimiento Civil; 5° y 6° de la Constitución Política de la República; 3° de la Ley N° 18.575 y demás pertinentes, se resuelve:

- I. Se acoge la demanda de fecha 25 de marzo de 2023, condenándose al Fisco de Chile a pagar al demandante don Cristian Gonzalo Vidal Iglesias por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de \$90.000.000 de pesos (noventa millones de pesos) más los reajustes e intereses consignados en el fundamento vigésimo sexto que precede.
- II. Que no se condena en costas al Fisco al no haber sido totalmente vencido.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Consúltese, si no se apelare.

N° 5.257-2023

Pronunciada por Juan Pablo Lobiano Correa, Juez Suplente del Décimo Quinto Juzgado Civil de Santiago.



Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintitrés de Febrero de dos mil veinticuatro**

